

CONTESTACION DE DEMANDA Referencia: 5307-3333-003-2023-00014-00 Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA Demandante: JOSÉ GABRIEL PÉREZ PEREZ Demandado: MUNICIPIO DE SILVANIA

Oficina Jurídica <oficinajuridica@silvania-cundinamarca.gov.co>

Vie 14/07/2023 4:31 PM

Para: Juzgado 03 Administrativo - Cundinamarca - Girardot

<jadmin03gir@cendoj.ramajudicial.gov.co>; rocjudadm199@procuraduria.gov.co

<rocjudadm199@procuraduria.gov.co>; jisafa81@hotmail.com <jisafa81@hotmail.com>; empusilvania

<empusilvania@silvania-cundinamarca.gov.co>

 1 archivos adjuntos (5 MB)

Memorial Contestacion de demanda y poder.pdf;

Señor

JUEZ TERCERO ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT - CUND
E.S.D.

Referencia:	5307-3333-003-2023-00014-00
Medio de control:	REPARACIÓN DIRECTA
Demandante:	JOSÉ GABRIEL PÉREZ PEREZ
Demandado:	MUNICIPIO DE SILVANIA

Asunto: **CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y EXCEPCIONES**

OSCAR JAVIER MORA BUSTOS, en mi calidad de apoderado del Municipio de Silvania Cundinamarca, conforme al poder que adjunto a la presente, procedo a contestar la demanda dentro del proceso de la referencia. Para tal efecto allego lo siguiente:

Memorial en archivo pdf con escrito de contestación de demanda y Poder para actuar con documentos de la Señora Alcaldesa y del suscrito.

Pruebas documentales, para ello se anexa link de enlace we transfer

[https://we.tl/t-S1P3VSG0sK?
utm_campaign=TRN_TDL_05&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_05](https://we.tl/t-S1P3VSG0sK?utm_campaign=TRN_TDL_05&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_05)

El presente enlace tiene una vigencia para ser visualizado de siete días.

En cumplimiento al Artículo 3 de la ley 2213 se la presente contestación de demanda de manera simultanea a las partes.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Oscar Javier Mora Bustos
Abogado Externo

OFICINA DEL AREA JURIDICA
Secretaria de Gobierno - Alcaldia Municipal.
Silvania Cundinamarca

"Todos Construimos el Cambio"

Tel: 868 5870 E-mail: alcaldia

@silvania-cundinamarca.gov.co

Diagonal 10 # 6 - 04 Silvania (Cund.) Código Postal: 252240



Señor

JUEZ TERCERO ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT - CUND

E. S. D.

Referencia: 5307-3333-003-2023-00014-00
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandante: JOSÉ GABRIEL PÉREZ PEREZ
Demandado: MUNICIPIO DE SILVANIA

Asunto: **CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES**

OSCAR JAVIER MORA BUSTOS, en mi calidad de apoderado del Municipio de Silvania Cundinamarca, conforme al poder que adjunto a la presente, procedo a contestar la demanda dentro del proceso de la referencia en los siguientes términos:

I. FRENTE A LAS PRETENSIONES

PRIMERA: Me opongo. Esta pretensión está llamada a no prosperar, toda vez que el demandante por intermedio de su apoderado judicial, aduce que las entidades demandadas, han omitido realizar obras de mitigación y de construcción de la red de alcantarillado y **el mal manejo de las aguas de la vía principal.**

Es importante hacer referencia en el presente caso sub examine, que la Alcaldía de Silvania Cundinamarca, no es una entidad prestadora de servicios públicos, y si bien, dicha prestación de servicios se encuentra en cabeza de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A. E.S.P “EMPUSILVANIA”, lo cierto es que el sector si cuenta con los servicios de acueducto y alcantarillado municipal, prueba de ello son los informes técnicos realizados tanto por la oficina de planeación del Municipio de Silvania, y lo o hecho por EMPUSILVANIA que se anexan con esta contestación. ”

Así mismo, no está demostrado en la demanda que los daños fueran atribuibles a las entidades demandadas, sin bien, se anexan unas visitas realizadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento de Cundinamarca, dichos informes son el resultado de unas inspecciones oculares realizadas a los predios aledaños al Sector de Yayata - Las Villas, pues como se observa en los mismos informes, las entidades ponen de presente el alcance de los mismos y advierten que no se hizo un estudio a profundidad de las circunstancias que en un momento determinado pudieran generar un daño, es la descripción de lo encontrado a lo largo de las visitas.

En Informe de Inspección Ocular y/o Visita Técnica - UAEGRD del día 11 de agosto de 2020, se manifiesta lo siguiente respecto al alcance del informe: “El presente informe se genera como resultado de una visita ocular, por lo tanto **no se puede considerar como un estudio técnico detallado, en el estricto sentido, su alcance es limitado**, toda vez que, este se basa en observaciones realizadas en visita al sitio, por el funcionario de la UAEGRD de la Gobernación de Cundinamarca y en el testimonio de las personas de la zona y las autoridades; la finalidad es generar recomendaciones, que permitan la toma de decisiones a corto y mediano plazo por parte de las entidades

involucradas, con el fin de mitigar y prevenir los riesgos a la población afectada.”(Negrillas fuera de texto)

Se observa que los informes, no se acreditan que los daños causados a la vivienda del hoy demandante fueran generados por la acción u omisión de la entidad que represento, pues la Alcaldía de Silvania Cundinamarca ha adelantado las gestiones necesarias y pertinentes a efectos de poder establecer a través de estudios técnicos las causas de la remoción en masa.

Dentro de las recomendaciones y compromisos adquiridos con la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, tenemos lo siguiente (ver recuadro)

DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS	
	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Determinar plan de acción e intervención.	CMGRD	Inmediato
Dar traslado del informe a la Alcaldía Municipal de Silvania, ICCU.	UAEGRD	Inmediato
Realizar inventario de obras de drenaje existentes	Alcaldía de Silvania	Inmediato
No permitir construcción en la urbanización Sisape ni en zonas que la rodean	Alcaldía de Silvania	Inmediato
Implementar sistema de monitoreo en la zona de estudio	Alcaldía de Silvania y UAEGRD	Inmediato

Al respecto el Municipio de Silvania, cumplió con sus compromisos adquiridos, tal como me permito referirme a cuatro puntos importantes que se exponen a continuación:

1°. Se expidió la Resolución No. 401, por medio de la cual se ordenó como medida preventiva la abstención de las obras en ejecución, y no se permiten la construcción de más edificaciones en la Urbanización de, sector Yayata - Las Villas y zonas aledañas y, se suspende la expedición de licencias de construcción de obras vigentes. (ver resolución como anexo probatorio).

2°. El Comité de Gestión del Riesgo del Municipio de Silvania Cundinamarca, en asocio con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca, en adelante (UAEGRD), ubicaron unos puntos estratégicos de monitoreo con el fin de establecer un sistema para interpretar el comportamiento del terreno y poder predecir la evolución de sus condiciones de estabilidad y tomar acciones preventivas y correctivas, con el fin de preservar la integridad de las personas y sus bienes, además, para poder establecer las diferentes estrategias de mitigación a las que haya lugar.

Prueba de ello, son los informes de monitoreo practicados el día 26 de agosto, 11 de septiembre, 24 de septiembre y 21 de octubre de 2020, que se anexan con esta contestación.

3°. El Municipio de Silvania Cundinamarca, ha puesto en conocimiento la situación presentada en el sector de Yayatá ante las autoridades del orden Departamental y Nacional, y por ello, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca, expidió el Decreto No. 513 del 27 de diciembre del 2022, mediante el cual se priorizan y

aprueban proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en este Decreto, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca, destina recursos para la construcción de obras para mitigar los riesgos que se presentan en las zonas aledañas a la Urbanización del municipio de Silvania Cundinamarca (ver imagen)

CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	FASE	VIGENCIA PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL APROBADO
2022004250031	Construcción de obras para mitigar los riesgos que se presentan en la zonas aledañas a la urbanización sasipa del municipio de Silvania, Cundinamarca	GOBIERNO TERRITORIAL	FACTIBILIDAD FASE III	2021-2022	\$ 3.673.954.111,00
FUENTES		TIPO DE RECURSOS		CRONOGRAMA MGA	VALOR
SGR - Asignación para la Inversión Regional		Asignación para la inversión regional 60% - Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático		2021-2022	\$3.523.954.111,00
SGR - Asignación para la Inversión Regional		Asignación para la Inversión Regional 60%		2021-2022	\$150.000.000,00

ARTÍCULO SEGUNDO. Designar como entidad ejecutora y encargada de adelantar la contratación del proyecto de inversión BPIN 2022004250031 denominado “**Construcción de obras para mitigar los riesgos que se presentan en la zona aledañas a la urbanización sasipa del municipio de Silvania, Cundinamarca**”, al Departamento de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca –UAERD, como se detalla a continuación:

4°. En aras de acreditar la diligencia por la situación presentada en el sector Yayta Las Villas, la Alcaldía de Silvania en cumplimiento a los compromisos y dada la necesidad de mitigar el riesgo en la Urbanización Sasipa, contrató con la empresa JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS, mediante contrato No. 123 del 2021, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS SEGÚN EL DECRETO 1807 DE 2014, ORIENTADOS A DETERMINAR LA CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO Y ESTABLECER LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN CORRESPONDIENTES EN LA ZONAS ALEDAÑAS A LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA”. (ver expediente administrativo que se aporta con la contestación de la demanda)

- **En cuanto al manejo de las aguas que vienen de la vía nacional.**

Ahora, en cuanto al mal manejo de las aguas, nótese que el mismo libelista en su escrito de demanda manifiesta **que hay un mal manejo de las aguas que vienen de la vía principal**, es importante hacer claridad en este punto que la entidad responsable y encargada de darle un buen manejo a las aguas fluviales que provienen de la vía principal corresponde al Consorcio Ruta 40.

La Concesión Ruta 40 o Vía 40 Express, es la encargada de operar, mantener y modernizar la vía Bogotá - Girardot, y es quien actualmente está ejecutando el proyecto de ampliación del Tercer Carril, **lo que se deduce de las diferentes obras que hoy en día se adelantan por parte de esta entidad y, que en manera alguna dicha responsabilidad o dicha labor corresponde al Municipio de Silvania.**

Por su parte compete también el manejo de las aguas a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, que por medio del contrato de Concesión bajo esquema APP No. 4 el 18 de octubre de 2016, facultó a la sociedad VÍA 40 EXPRESS S.A.S., firma concesionaria, y está a su vez al Consorcio Ruta 40.

● En cuanto a la expedición de la licencia de construcción:

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es en cuanto a la licencia de construcción otorgada al hoy demandante, pues, si bien se otorgó una licencia de construcción para obra nueva, dicha licencia obedeció a que se allegó una solicitud con unos documentos que el Jefe de Planeación de la época, consideró cumplía con los requisitos que se exigían en su momento para efectos de poder construir una obra nueva, sin embargo, de los informes técnicos allegados por parte de los mismos funcionarios de la Oficina de Planeación, se observa claramente sin hacer mayores elucubraciones, que se infringió las normas urbanísticas y por ende, no se cumplió con la licencia de construcción otorgada en su momento, prueba de ello es que se aportaron unos planos por parte del hoy demandante, aduciendo que la obra a construirse constaría de dos pisos, sin embargo, de los informes se extrae que se construyeron tres pisos y un altillo, lo cual claramente nos permite inferir qué se transgredieron las normas urbanísticas y que los daños ocasionados a la construcción de vivienda que hoy se reclaman, no corresponden directamente, y no pueden ser atribuibles a la entidad que represento por acción u omisión, ya que cómo se mencionó anteriormente, la estructura de la vivienda que hoy se reclama no corresponde a la que hoy encontramos físicamente y, que fue objeto de visita por parte de los funcionarios de la Oficina de Planeación Municipal.

Además de lo anterior, se cuenta con el dictamen pericial aportado por la misma parte demandante, donde claramente se observa que la licencia fue otorgada para la construcción de 101,85 M2, pero la reclamación se hace por 125 M2 (ver imagen).

CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE			
\$174.000.000			
Conforme con la siguiente tabla			
RESUMEN DEL VALOR TOTAL DEL INMUEBLE			
COMPONENTE	Area en m2	Valor m2 adoptado	Valor Total
1. Terreno	50,00	\$ 633.713	\$ 31.685.628
2. Construcción	125,00	\$ 1.140.683	\$ 142.585.327
Valor Integral (1+2)			\$ 174.270.955
Valor total del inmueble adoptado para el avalúo			\$ 174.000.000
Vigente por un año a partir de la fecha de este informe octubre 8 de 2022			

De conformidad con la imagen anterior, se estipula el avalúo del predio o de la construcción el mismo perito en su informe aduce que son 125 metros cuadrados de obra construida, pero si revisamos la resolución 407 del 18 de diciembre del 2020 claramente observamos que dicha licencia se otorgó para una construcción de 101, 85 metros cuadrados (ver imagen).

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al Señor JOSE GABRIEL PEREZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 79.276.978, expedida en Bogotá- Cundinamarca; LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA, para una vivienda ubicada en el LOTE #13, MANZANA "B" CONJUNTO RESIDENCIAL "SASIPA", zona urbana del Municipio de Silvania. Distinguido con el Número Catastral 01-00-0121-0003-000 y Número de Matrícula Inmobiliaria 157-88209, respectivamente.

De conformidad con el siguiente cuadro de áreas:

CUADRO TOTAL DE AREAS

AREAS	M2		%
TOTAL AREA DEL LOTE	50,00		
AREA PRIMER PISO A CONSTRUIR	50,00		
AREA SEGUNDO PISO A CONSTRUIR	51,85		
AREA TOTAL A CONSTRUIR	101,85		
AREA LIBRE	1,15		
NUMERO DE PISOS		2	
INDICE DE OCUPACION			1,00
INDICE DE CONSTRUCCION			2,03
ESTACIONAMIENTOS			

Así las cosas, no es posible que se le responsabilice a la Alcaldía de Silvania, por los daños y perjuicios como Tampoco hay lugar a indemnización de algún tipo por parte de este ente territorial que represento ya que como se dijo el demandante no puede alegar en su favor su propia culpa Pues fue el mismo demandante quien con su mal proceder construyó su obra nueva quebrantando no solo la licencia que se le había otorgado por parte de la oficina de planeación del Municipio de Silvania sino que infringió las normas urbanísticas como se observan de los informes que se allegan s con esta contestación de demanda.

SEGUNDA: Me opongo a esta segunda pretensión, ya que de la explicación y justificación planteada en los párrafos anteriores, al no existir responsabilidad por parte de la Alcaldía de Silvania, tampoco podría reclamarle indemnización o algún tipo de reclamación o erogación económica por concepto de perjuicios, pues no existe un nexo causal entre el daño y el hecho por acción u omisión de esta entidad territorial, por el contrario estamos frente a una situación de mala fe por parte del demandante, quien reclama daños y perjuicios que él mismo ocasionó al incumplir las normas urbanísticas y, como se dijo anteriormente, no está demostrado que los daños se pudieran atribuir al Municipio de Silvania, por lo tanto, esta pretensión está llamada a no prosperar y así depreco de su señoría, que se despache desfavorablemente.

TERCERA. Me pongo, por las anteriores razones de hecho y de derechos expuestas en los numerales primera y segunda de la manifestación frente a estas pretensiones.

CUARTA. Me opongo. Esta pretensión está llamada a no prosperar, toda vez que de no declararse la responsabilidad de la entidad territorial que represente y de no condenarse a la misma al pago de indemnización o perjuicio alguno, pues no hay lugar a que se cumpla un pago en los términos solicitados por la parte demandante.

II. HECHOS

1°. Es cierto y se acepta.

2°. No nos consta, pues desconocemos completamente que el demandante haya invertido sus ahorros como lo afirma su apoderado en el libelo demandatorio, no está probado que se haya hecho tal inversión; más que un hecho, es una apreciación subjetiva de la parte demandante.

3°. Es parcialmente cierto y explico: La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizó una visita ocular el día 11 de agosto de 2020, donde se observaron algunas afectaciones a las viviendas sin que se acredite en grado de certeza que las afectaciones a las viviendas en la Urbanización, fueran a causa o consecuencia de la remoción en masa como lo afirma el demandante, por lo tanto, no se puede afirmar que la causa de las afectaciones a la vivienda del demandante sea la remoción en masa, máxime si se tiene en cuenta que dicha construcción quebrantó las normas urbanísticas y, transgredió lo autorizado en la licencia de construcción, como explicaré más adelante.

4°. Es Parcialmente cierto y explico: Es cierto en cuanto a que se profirió un fallo de tutela con fecha 04 de junio de 2019 el cual se dio cumplimiento como se observa con la prueba documental que se aporta contentiva de la carpeta administrativa

de la Urbanización Sasipa (ver folios 44, 45, 57).

No es cierto, no se acepta y no se considera un hecho cuando el demandante por intermedio de su apoderado judicial, realiza una consideración muy subjetiva, realiza un comentario crítico hacia las entidades demandadas, sin puntualizar los actos o acontecimientos que demuestra su negligencia, aduce que, como consecuencia de la negligencia por parte de las entidades demandadas, se le ocasionaron graves daños; sin embargo, no está probado que los daños aludidos por la parte demandante, tengan relación con actos atribuibles a la entidad que represento por omisión o por su actuar negligente.

No está aprobado en la demanda, que el inmueble deba ser demolido o declarado en ruina, pues la simple afirmación del libelista no es suficiente para establecer que un bien deba ser demolido o declarado en ruina, el estado de ruina, se declara cuando la edificación presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construcción, firmado por un ingeniero acreditado, de conformidad con los requisitos de la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, procedimiento este que no se aportó con la demanda.

La alcaldía de Silvania Cundinamarca en asocio con la Unidad de Gestión del Riesgo y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, han gestionado y adelantado los estudios correspondientes a efectos de atender la situación por la que atraviesa la Urbanización y al no contarse con los recursos económicos para atender tal contingencia, se ha escalado la problemática al Departamento de Cundinamarca quien ya destinó los recursos para los planes de contingencia.

5°. Es un hecho parcialmente cierto y explico: Es cierto en cuanto a que en efecto la Alcaldía de Silvania, contrató con la empresa JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS, mediante contrato No. 123 del 2021, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS SEGÚN EL DECRETO 1807 DE 2014, ORIENTADOS A DETERMINAR LA CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO Y ESTABLECER LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN CORRESPONDIENTES EN LA ZONAS ALEDAÑAS A LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA”.

Es importante aclarar en este hecho, que las aguas escurrientía a las que hace alusión el demandante por intermedio de su apoderado judicial, corresponden a las aguas que provienen de la vía pública nacional, y cómo se manifestó en otro acápite, el manejo de las aguas escurrientías que provienen de la vía nacional, corresponde al Consorcio Ruta 40, y no al Municipio de Silvania Cundinamarca, por lo tanto, no se puede atribuir responsabilidad alguna frente al manejo de las aguas que provienen de la vía principal nacional, ya que como se ha dicho, el Municipio carece de competencia y facultad para intervenirlas; ahora, en cuanto al mal manejo de las aguas servidas y a la insuficiencia de la infraestructura, pues como se observa en los informes que allega, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A. E.S.P “EMPUSILVANIA”, dicha entidad está en constante acompañamiento de verificación de tales obras de infraestructura y, como la misma entidad manifiesta en sus informes y en sus estudios, el sector de Yayatá - Las Villas, por ser un sector rural no se encuentra dentro del perímetro que permita la prestación del servicio de alcantarillado, pues dicho servicio solo se presta en el sector urbano.

6°. Este hecho no se acepta: Manifiesta el libelista a manera de conclusión las fallas en que incurrieron las entidades demandadas, que en su sentir, constituye falta de diligencia por parte de la Alcaldía Municipal de Silvania, que como primera medida el municipio le otorgó una licencia para construcción y, que ello conllevó a que su prohijado realizará una inversión, lo cual generó una confianza legítima, sin embargo, no especifica qué tipo de inversión realizó el propietario del lote o su prohijado, pues no está probado en esta demanda el tipo de inversión que realizó el señor José Gabriel Pérez Pérez, como lo afirma su apoderado, ahora en cuanto a la confianza legítima, tampoco está acreditado que otorgar una licencia de construcción como la queduca el demandante, se constituya una confianza legítima, ya que no es solo mencionar que hay una confianza legítima, sino, que se debe establecer por qué otorgar una licencia de construcción a petición de un interesado y otorgarla, venga implícita una confianza legítima.

Como segunda medida, manifiesta el demandante por intermedio de su apoderado judicial, que se presentaron fallas y, la administración no se hizo presente, pues esto contraviene lo manifestado por el mismo demandante a lo largo de su demanda, ya que no solo el municipio se ha hecho presente, como él mismo lo manifestó en el hecho Quinto, al manifestar que la Alcaldía de Silvania, contrató una nueva empresa JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS, para determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación correspondientes en las zonas aledañas la Urbanización del municipio de Silvania Cundinamarca, de igual manera no solo ha hecho presencia la Alcaldía Municipal de Silvania Cundinamarca, sino que, se hacen presentes otras instituciones que el mismo demandante relaciona en el acápite de pretensiones, como en los hechos, tal es el caso de las intervenciones y el acompañamiento que a realizado la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, por ello, no se puede aceptar este hecho como lo plasma el demandante, ya que está demostrado que no solo la Alcaldía Municipal de Silvania Cundinamarca, ha estado presta a la situación que se presenta en la Urbanización sino que, se han tomado las medidas necesarias para en principio establecer las medidas de mitigación y con posterioridad tener la trazabilidad para tomar las acciones a las que haya lugar.

Una de las medidas que tomó la Alcaldía de Silvania, con posterioridad a los estudios realizados, fue expedir la Resolución No. 401 del 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual, se ordenó como medida preventiva la abstención de las obras en ejecución y, no se permite la construcción de más edificaciones en la Urbanización de ; y, para el sector las villas y zonas aledañas, se suspende la expedición de licencias de construcción de obras vigentes; esta Resolución tiene como antecedente la Inspección Ocular o Visita Técnica, realizada por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizada el 11 de agosto del 2020 y, el Acta No. 18 del 14 de agosto del 2020 del Consejo Municipal, para la gestión del riesgo y atención de desastres cuyo objeto de la reunión consistió en medidas a implementar en la Urbanización , de igual manera se tuvo en cuenta el informe técnico de número 0927 del 14 de septiembre de 2020, realizado por la Corporación Autónoma Regional del Sumapaz "CAR".

Como tercera medida, manifiesta el demandante por intermedio de apoderado judicial, que no se realizaron obras de impacto para mitigar las fallas, lo cual no es acorde con la realidad, ya que reitero, el mismo demandante afirma que el municipio contrató los servicios de una entidad para determinar la categorización

del riesgo, como en efecto se hizo, ahora sin gracia de discusión, esta entidad tuviera que realizar alguna obra de impacto como lo manifiesta el demandante, sería el manejo de las aguas que provienen de la vía nacional, lo cual como se ha dicho en varias oportunidades, no es competencia del municipio ya que esta labor está en cabeza única y exclusivamente del Consorcio Ruta 40, quién es la institución o entidad que administra esta vía nacional; y por lo tanto, compete a ellos realizar las obras que conlleven a un adecuado manejo de las escorrentías y de las aguas provenientes de esta vía. El municipio limita su actuar a realizar los estudios para poder determinar el grado de riesgo y una vez establecido el riesgo se procede a establecer las medidas a tomar, la cuales fue suspender la construcción y el otorgamiento de nuevas licencias de construcción o de urbanismo en el sector.

En cuanto al numeral cuarto del hecho sexto, donde el actor manifiesta que por el mal manejo de las aguas lluvias de la vía nacional y por falta de alcantarillado y que las entidades no realizaron las obras de mitigación, a pesar de que existe un fallo de tutela que ordena adelantar dichas obras, tenemos que decir como se ha dicho de manera reiterada, que el manejo de las aguas de la vía nacional, no son del resorte del municipio de Silvania y, que por lo tanto, ese manejo corresponde al Consorcio Ruta 40, quien este ente territorial citará como litis consorcio necesario dentro de la presente demanda, a efectos de que se determine la responsabilidad del manejo de estas aguas como causa principal de la remoción en masa presentada y, que dicho manejo de aguas corresponde a ellos.

7°. No se considera un hecho y no se acepta. No se acepta este hecho, ya que de la lectura que se hace a la transcripción del mismo, no reúne los requisitos del hecho como tal adoleciendo tal descripción de técnica jurídica y, atendiendo la literalidad de lo narrado, no se distingue si es una pretensión de la demanda, una consideración o un punto de vista muy subjetivo del apoderado de la parte demandante, ya que inicia diciendo que su mandante tiene derecho a que se le pague un precio y se le indemnice por los perjuicios ocasionados y, a renglón seguido, manifiesta que dicho pago obedece a una supuesta negligencia por parte de parte de las entidades demandadas.

8°. Es Cierto. El Municipio de Silvania Cundinamarca, es una entidad territorial del orden municipal y de derecho público, donde se manejan recursos públicos; las gestiones adelantadas por esta entidad se realizan a través del comité de gestión del riesgo municipal, y a través de las entidades como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y el Comité de Gestión del Riesgo Departamental, en ese orden de ideas, los planes de contingencia se limitan a tomar medidas de prevención o mitigación de necesidades primarias, como el traslado de manera temporal o el subsidio de arrendamiento para las personas que lo requieran; en el presente caso, no obra en los archivos del municipio peticiones o requerimientos por parte del hoy demandante, solicitando algún tipo de ayuda o subsidio y por lo tanto, el municipio no puede hacer erogaciones que no estén contempladas dentro de los planes de contingencia, como tampoco está autorizado para realizar pago por indemnizaciones o por daños o perjuicios que se ocasionen hasta tanto no haya una orden judicial o administrativa que así lo ordene.

III. EXCEPCIONES PREVIAS

3.1. Caducidad de la Acción

Se propone esta excepción previa de Caducidad, sin que ello implique aceptación de los hechos y pretensiones incoadas por la parte demandante así:

La Sección Tercera del Consejo de Estado, advirtió que para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones no se ejerzan en un término específico.

Así mismo, indicó que las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y, en el caso de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción, para hacer efectivo su derecho.

En tal sentido, es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera *ipso iure* o de *pleno derecho*, es decir, que no admite renuncia y, el juez debe declararlo de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la determinada acción judicial.

Tenemos que la Caducidad ha sido entendida como la extinción de la posibilidad de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente fijado por la ley en forma objetiva. Igualmente, la Corporación indicó que, para determinar la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, de conformidad con el literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), se estableció un término de dos años contados a partir de:

1. Del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.
2. Cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo, si fue en fecha posterior, y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Así las cosas, se hace preciso determinar en qué momento se concreta el daño antijurídico que se pretende acreditar en la demanda, acompañado con las pruebas sumarias, para la contabilización del término.

En los términos del artículo 90 de la Constitución Política de 1991, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por parte del Estado.

Justamente, el término de caducidad para que se declare la responsabilidad de la Nación con fines de reparación de un daño por acción u omisión de agentes estatales, es de dos (2) años, contados desde el día siguiente del suceso, a partir de su ocurrencia o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de la misma, tal como lo señala la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Descendiendo a nuestro caso concreto, según el escrito de la demanda, en el hecho CUARTO, el demandante señala que hubo un fallo de tutela y en efecto así fue, donde indica que por hechos acaecidos en el mes de mayo de 2019, el Personero Municipal del Municipio, instauró una acción de tutela, la cual fue fallada por el Juez, el día 04 de junio de 2019, es decir, el demandante desde esa época tuvo conocimiento de los hechos generadores del daño; posteriormente aduce el

demandante en el hecho TERCERO de la demanda que: “La casa de habitación empezó a presentar graves afectaciones estructurales, grietas y una grave inclinación debido a la remoción en masa presentada en el sector, la Unidad Administrativa Especial para la gestión del riesgo de desastres, realizó visita técnica el 13 de julio de 2020, encontrando lo siguiente:

1. De conformidad con el informe de inspección ocular y/o visita técnica con radicado 2020059034, de fecha 13 de julio de 2020 y fecha de asistencia 11 de agosto de 2020, efectuado por los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UADGRD), con el fin de realizar un diagnóstico de la remoción en masa que se presenta sobre la Urbanización Sásipa, dentro de las actividades y recomendaciones para la mitigación y reducción del riesgo plantean implementar un plan de acción a los funcionarios de la alcaldía que hacen parte del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre las acciones se formuló la siguiente:
“Se recomienda no permitir construcciones en la urbanización, ni en zonas aledañas en el sector que se consideran de alto riesgo”. (Negrilla fuera de texto)
2. De igual manera, mediante acta número 18, de fecha 14 de agosto de 2020 del Consejo para la Gestión del Riesgo y atención a Desastres (CMGRD), cuyo objeto de la reunión consistió en: “Medidas a implementar en la Urbanización Sásipa”, se socializó por parte del Ingeniero Ricardo Castañeda de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, lo que sucede en el sector de Sasipa, así:
 - “Se evidenció que la remoción en masa está activa, se visibilizaron agrietamientos en terreno el cual es muy arcilloso y húmedo, así mismo, se visitó el sector Yayatá Las Villas y se encontró que no cuenta con sistema de alcantarillado y que las aguas son arrojadas al terreno en mención, afectándolo más. La vegetación que encontraron en el sector aduce a un humedal, se realizó el recorrido y no se encontró ningún cuerpo de agua presente, lo que indica que el sector es afectado por el mal manejo de aguas de la vía principal y de las aguas residuales del sector Las Villas.
 - Dentro de los hallazgos se encontró que se están realizando más o menos tres construcciones en el sector donde hay hundimientos y agrietamiento del terreno, en ese orden de ideas no se puede hablar de un sector de riesgo donde se esté permitiendo la continuidad a las obras, es por ello que recomendamos suspender las obras por lo menos mientras se desarrollan unos estudios a mayor profundidad para identificar que tanto riesgo hay (...).” (Negrilla fuera de texto)

De la lectura que se hace al recuadro y a la narración de los hechos TERCERO y CUARTO, se tiene que la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, de conformidad con el informe de inspección ocular y visita técnica del día 13 de julio de 2020 y 11 de agosto 2020, recomendó no permitir construcciones en la urbanización y en zonas aledañas en el sector de Yayatá - Las Villas; y fue en dichas visitas que se visualizaron daños a unas viviendas en el mismo sector.

En ese orden de ideas y, atendiendo al inciso segundo del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, debemos entonces tener como punto de partida para la contabilización del término de caducidad el día 13 de julio del año 2020, que es cuando el demandante tuvo conocimiento del hecho generador del daño, esto a las luces del inciso segundo del artículo 164 de la ley 1437 del 2011, en tal sentido y como quiera que el medio de control de reparación directa tiene un término de dos (2) años para que el accionante interponga la demanda, este término iría hasta el día 13 de julio del año 2022.

Ahora, se observa que el demandante por intermedio de su apoderado judicial presentó la solicitud de conciliación con la cual interrumpe el término de caducidad hasta el día 2 de noviembre del año 2022, es decir, cuando ya el término de caducidad había fenecido ampliamente, pues como se dijo anteriormente, el demandante contaba hasta el día 13 de julio del año 2022, para ejercer su derecho de acción.

Se evidencia que el demandante agotó todo el requisito de procedibilidad, el día 17 de enero del año 2023 y, radicó la demanda el día 18 de enero del mismo año, es decir, cuando el término de caducidad había fenecido, porque como se dijo anteriormente, el demandante tuvo conocimiento de los hechos el día 13 de julio del año 2020, radicando la demanda hasta el día 18 de enero del año 2023, es decir, cuando habían transcurrido dos años, tres meses y 19 días, si se tiene en cuenta

que interrumpe el término el 2 de noviembre de 2022 con la solicitud de conciliación ante la Procuraduría Delegada.

Así las cosas, está excepción a la luz del artículo 164 inciso segundo de la ley 1437 2011, está llamada a prosperar.

Como pruebas de esta excepción, tenemos en primer lugar el escrito de la demanda y su radicación, así mismo, la solicitud de conciliación ante la Procuraduría, los informes de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca de fecha 13 de julio del 2020, el informe del 11 de agosto de 2020 y la carpeta administrativa de la Urbanización Sásipa.

Corolario de lo anterior, a la luz de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, se tiene que la limitación temporal del derecho a acceder a la administración de justicia fijada por el legislador tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica, pues busca impedir que asuntos susceptibles de litigio permanezcan en el tiempo sin ser definidos judicialmente. (C. P. Stella Conto Díaz). CE Sección Tercera, Sentencia 76001233300020140083901 (54799), Jun. 8/17

3.2. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales: Ausencia de fundamentos de derecho de las pretensiones

En las pretensiones invocadas por el Demandante solicita lo siguiente:

“PRIMERA.- Declarar Administrativamente responsable al MUNICIPIO DE SILVANIA, Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A. E.S.P. EMPUSILVANIA, por los perjuicios materiales y daños causados al señor JOSE GABRIEL PEREZ PEREZ, por la omisión de las entidades convocadas al no realizar las obras de mitigación y la construcción de la red de alcantarillado el mal manejo de las aguas de la vía principal, que desencadenó en la remoción en masa a causa de que el sector Yayatá Las Villas, no cuenta con sistema de alcantarillado y las aguas son arrojadas al conjunto residencial , donde se encuentra ubicado el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 157-88209 ubicado en la Manzana B del Conjunto Residencial , de propiedad del convocante, el cual se construyó con base en las licencias de obras de urbanismo No. 4207 de diciembre de 2018.

SEGUNDA.- Como consecuencia de la anterior declaración, Condenar al MUNICIPIO DE SILVANIA, Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A. E.S.P. EMPUSILVANIA, a pagar a mi poderdante los perjuicios Patrimoniales (perjuicios materiales) sufridos por mi mandante como consecuencia del deterioro de su bien inmueble, así.

1- PERJUICIOS PATRIMONIALES

Los perjuicios de orden material actuales y futuros son los siguientes:

LA SUMA DE \$174.000.000, ESTIMACIÓN DE LA MINUSVALÍA DEL PREDIO POR LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DEL LOTE Y LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA DE URBANISMO INICIALMENTE OTORGADA.

TERCERA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

CUARTA. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.”

El Artículo 162 del CPACA establece que, toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y en su numeral cuarto señala como requisito de la demanda que debe contener los fundamentos de derecho de las pretensiones.

De la lectura que se hace al escrito de la demanda, se observa que el demandante por medio de su apoderado judicial omitió cumplir con los fundamentos de derecho sobre los cuales funda sus pretensiones, el libelo demandatorio adolece totalmente de invocación normativa incluso erra el libelista cuando esboza un juramento estimatorio que es un requisito establecido en Código general del Proceso mas no en el medio de control de reparación directa cuyo trámite está regulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para probar este medio efectivo basta con remitirnos al escrito de la demanda, donde claramente se observa que la parte demandante omitió por completo dar cumplimiento al numeral cuarto del artículo 162 del CPACA, pues brilla por su ausencia la fundamentación de derecho, carga procesal con la que debía cumplir la parte demandante en estricto, cumplimiento a la disposición legal antes enunciada, por lo tanto su señoría, Solicito se despache favorablemente esta excepción previa, porque como se dijo, la demanda adolece de los requisitos formales establecidos en las normas creadas para tal efecto, de hecho, se observa que a lo largo de la demanda hace una narración de hechos de forma subjetiva, pero no cita ningún marco normativo que indique el nexo causal entre el hecho y el daño y, sin sustentar las pretensiones impetradas por ello y, de conformidad con el artículo 162 de la ley 1437 de 2011, numeral cuarto, resulta claro que el demandante debe invocar la norma que considera quebrantada con su respectiva sustentación lo cual en el presente caso no ocurrió.

3.3. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios (Numeral 9, Artículo 100 C.G.P.).

Teniendo en cuenta los hechos y las pretensiones de la demanda donde se manifiesta que **hay un mal manejo de las aguas que vienen de la vía principal, por lo tanto**, es importante hacer claridad que la entidad responsable y encargada de darle un buen manejo a las aguas fluviales que provienen de la vía nacional, que corresponde al Consorcio Ruta 40 actualmente.

El Consorcio Ruta 40 es la encargada de operar, mantener y modernizar la vía Bogotá - Girardot, y es quien actualmente está ejecutando el proyecto de ampliación del Tercer Carril, **lo que se deduce de las diferentes obras que hoy en día se adelantan por parte de esta entidad.**

Este aspecto es corroborado en los informes de visita ocular realizados tanto por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, quien describe lo siguiente: "(...) Aunado a lo anterior se suman aguas lluvias aportadas por un tramo de la vía panamericana, según información aportada en campo por los señores acompañantes, ya que no fue posible corroborarlo (...)" Ver informe Técnico DRSU No. 0927 de 14 SEP. 2020, que se aporta con esta contestación.

Así las cosas, resulta forzoso vincular como litisconsorcio necesario al presente proceso la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, que por medio del contrato de Concesión bajo esquema APP No. 4 el 18 de octubre de 2016, facultó a la

sociedad VÍA 40 EXPRESS S.A.S., firma concesionaria, y está a su vez al Consorcio Ruta 40.

Para acreditar la legitimación en la causa por activa de las entidades que se pretende sean vinculadas con litisconsorcios necesarios tenemos como prueba el acta suscrita por las entidad Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías - INVIAS a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, y de ésta, a su vez, a la Sociedad Concesionaria VIA 40 EXPRESS S.A.S., de la infraestructura vial que será afectada al contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 4 de 2016, correspondiente al proyecto denominado TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT. Suscrita el día 01 de diciembre de 2016 en Melgar Tolima.

Así mismo se tiene conocimiento que La Unidad Funcional 6, está comprendida entre los municipios de Silvania y Granada con una longitud aproximada de 18 kilómetros. Los trabajos comprenden la rehabilitación y ampliación a tercer carril en ambas calzadas, la construcción de nuevos puentes peatonales así como la adecuación de puentes vehiculares y peatonales, estabilización de taludes y obras hidráulicas, entre otras actividades. <https://via40express.com/unidad-funcional-6/>

Así, en virtud de los artículos 100, 101, 102 del C.G.P., solicito se declare probada la presente excepción y se aporta como prueba el informe Técnico DRSU No. 0927 de 14 SEP. 2020, documento de conformación consorcio VIA 40 EXPRESS S.A.S, y acta de entrega del 01 de diciembre de 2016.

IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO

4.1. Culpa de un Tercero

En cuanto a la culpa de un tercero, esto ocurre cuando el daño es causado por una persona diferente a la que es señalada, es decir, aquí no hay nexo causal entre el daño causado y la persona que causa el daño.

Dicho lo anterior y como se explicó en el acápite de excepciones previas, el libelista aduce que la remoción en masa y los daños han sido ocasionados por el mal manejo de las Aguas que provienen de la vía principal en este caso la avenida Panamericana Pero como se ha manifestado el municipio no tiene injerencia en el manejo de estas aguas toda vez que corresponde al Consorcio Ruta 40 operar, mantener y modernizar la vía Bogotá - Girardot, y es quien actualmente está ejecutando el proyecto de ampliación del Tercer Carril, **lo que se deduce de las diferentes obras que hoy en día se adelantan por parte de esta entidad.**

Este aspecto es corroborado en los informes de visita ocular realizados tanto por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, quien describe lo siguiente: "(...) Aunado a lo anterior se suman aguas lluvias aportadas por un tramo de la vía panamericana, según información aportada en campo por los señores acompañantes, ya que no fue posible corroborarlo (...)” Ver informe Técnico DRSU No. 0927 de 14 SEP. 2020, que se aporta con esta contestación.

Así las cosas, también es necesario vincular en el presente proceso a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, que por medio del contrato de Concesión bajo esquema APP No. 4 el 18 de octubre de 2016, facultó a la sociedad VÍA 40 EXPRESS S.A.S., firma concesionaria, y está a su vez al Consorcio Ruta 40.

Para acreditar las circunstancias antes descritas tenesmo como prueba documental el acta suscrita por las entidadde Acta de entrega del Instituto Nacional de Vías - INVIAS a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, y de ésta, a su vez, a la Sociedad Concesionaria VIA 40 EXPRESS S.A.S., de la infraestructura vial que será afectada al contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 4 de 2016, correspondiente al proyecto denominado TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT. Suscrita el día 01 de diciembre de 2016 en Melgar Tolima.

Por lo anterior esta excepción está llamada a prosperar lo cual depreco de su señoría.

4.2. Culpa Exclusiva de la víctima.

Revisado el expediente que obra en la Oficina de Planeación de Silvania, se puede evidenciar que el señor JOSE GABRIEL PEREZ PEREZ presentó solicitud de licencia de construcción, la Oficina de Planeación otorgó licencia de construcción por medio de la “Resolución Administrativa No. 4207 de diciembre 20 de 2.018 “por medio de la cual se concede una Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva”.

Revisando los informes de visita de campo realizado por los funcionarios de la oficina de planeación y de gestión del riesgo se observa claramente que de acuerdo al registro fotográfico aportado en dichos informes el hoy demandante transgrede las normas urbanísticas toda vez que la licencia de construcción fue otorgada de conformidad con el plano que aportó el solicitante para la expedición de la licencia de construcción en en la siguiente imagen Se observa el plano aportado por el señor José Gabriel Pérez en su solicitud de licencia (ver imagen uno y dos) y a la vez podemos observar la construcción cómo está en la actualidad. (ver imagen tres y cuatro)

IMAGEN UNO

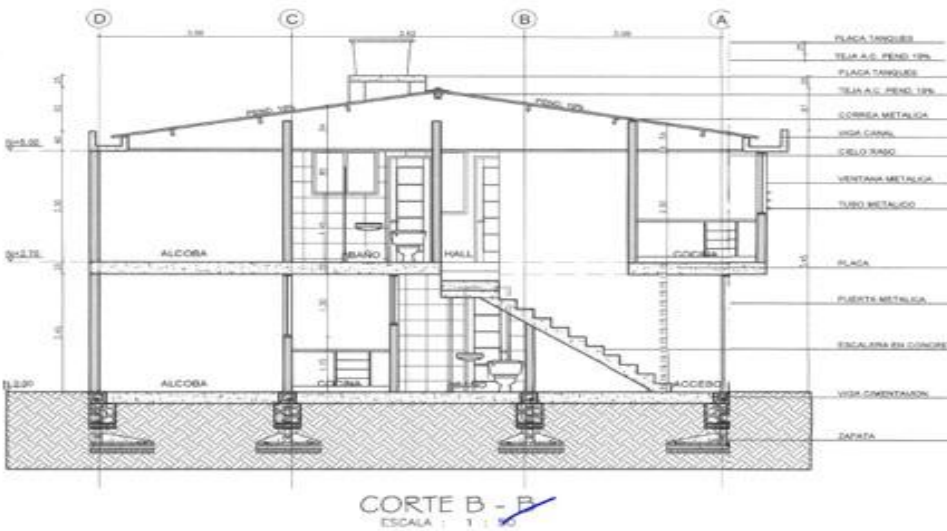


IMAGEN DOS

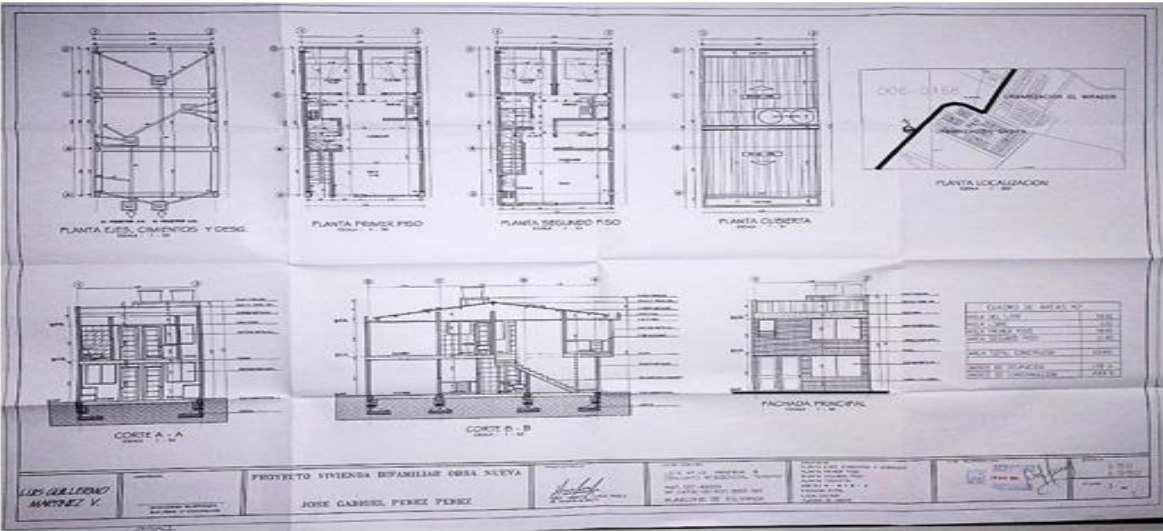


IMAGEN TRES



IMAGEN CUATRO



En el informe del 29 de junio suscrito por el ingeniero Camilo Ardila Bermeo contratista del Municipio de Silvania quien funge como apoyo a la oficina de planeación y de Gestión del Riesgo se establece las siguientes conclusiones:

El predio utilizado para vivienda familiar cuenta con una licencia de construcción en la modalidad de obra nueva con la referencia No. 4207 del 20 de diciembre de 2018.
La licencia de construcción anteriormente referenciada fue aprobada para una construcción de una edificación de dos pisos con un sistema estructural aporticado con uso de vivienda.
Que actualmente la edificación construida sobre el lote 13 de la manzana B de la urbanización Sasipa, cuenta con tres pisos incumpliendo los lineamientos aprobados en la licencia 4207 del año 2018.
La construcción de la edificación para dos pisos debió prever en su diseño estructural la norma NSR 10 título E que está dado para construcciones de vivienda en dos pisos.
Como la construcción excede los dos pisos, se debe diseñar como el título C de la norma NSR 10.
Por lo tanto, se le debe solicitar al propietario del predio los cálculos estructurales y estudio de suelos con el ánimo de constatar que la obra se construyó con el método que para este caso aplica; constatar si la cimentación se realizó en el piso adecuado; constatar si las cargas utilizadas para esta construcción fueron las correctas aplicadas y si la capacidad portante del predio puede resistir el peso de los tres pisos.

Lo descrito anteriormente no era desconocida por el señor Perez , quien, en sus obras de construcción , actuó violando flagrantemente las normas urbanísticas, pues excede lo autorizado en la licencia de construcción, esto evidencia que el señor Perez era conocedor de la situación y de las reglas del licenciamiento; se debe indicar de forma adicional, que dedicarse a esta actividad exige el conocimiento de la normatividad y de la debida diligencia en el cumplimiento de la normatividad urbanística, pues las normas sobre esta temática no son sólo aplicables a las autoridades municipales, también a los particulares que se dedican a las actividades reguladas en dichas normas.

En tal sentido se puede inferir de forma lógica y conforme con la sana crítica que el señor Pérez, no fue ajeno a la situación que se presentó con la licencia de construcción, pero contrario, hizo parte de los trámites necesarios para su aprobación y una vez aprobada excedió en el área construcción aprobada, generando los daños que hoy reclama.

Esto nos conlleva a culpa exclusiva de la víctima. En este caso el señor Pérez, conocedor de la normatividad que regula su oficio, y conocedor de los planos que fueron aprobados por la Oficina de Planeación y que sirvieron de fundamento para la expedición de la licencia de construcción, de manera dolosa excede su construcción a lo realmente autorizado, en tal sentido, existe una franca actividad del señor Pérez para generar la situación que a la postre predica imputable a la administración, pues como se observa en los informes, hay un sobrepeso en l construcción que muy probablemente sean las causas de los daños que reclama el demandante y esto rompe el nexo de causalidad del presunto daño con el Municipio de Silvania, ya que la actividad negligente, por menos decir, del señor Pérez, fue el generador de la situación que a la postre se reclama como dañosa.

Lo transcrito anteriormente guarda estricta relación con el dictamen pericial aportado por la misma parte demandante, donde claramente se observa que la

licencia fue otorgada para la construcción de 101,85 M2, pero la reclamación se hace por 125 M2 (ver imagen).

CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE			
\$174.000.000			
Conforme con la siguiente tabla			
RESUMEN DEL VALOR TOTAL DEL INMUEBLE			
COMPONENTE	Area en m2	Valor m2 adoptado	Valor Total
1. Terreno	50,00	\$ 633.713	\$ 31.685.628
2. Construcción	125,00	\$ 1.140.683	\$ 142.585.327
Valor integral (1+2)			\$ 174.270.955
Valor total del inmueble adoptado para el avalúo			\$ 174.000.000
Vigente por un año a partir de la fecha de este informe octubre 8 de 2022			

De conformidad con la imagen anterior, se estipula el avalúo del predio o de la construcción el mismo perito en su informe aduce que son 125 metros cuadrados de obra construida pero si revisamos la resolución 407 del 18 de diciembre del 2020 claramente observamos que dicha licencia se otorgó para una construcción de 101, 85 metros cuadrados (ver imagen).

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al Señor JOSÉ GABRIEL PEREZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 79.276.978, expedida en Bogotá- Cundinamarca; **LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE OBRA NUEVA**, para una vivienda ubicada en el LOTE #13, MANZANA “B” CONJUNTO RESIDENCIAL “SASIPA”, zona urbana del Municipio de Silvania. Distinguido con el Número Catastral 01-00-0121-0003-000 y Número de Matrícula Inmobiliaria 157-88209, respectivamente.

De conformidad con el siguiente cuadro de áreas:

CUADRO TOTAL DE AREAS			
AREAS	M2		%
TOTAL AREA DEL LOTE	50,00		
AREA PRIMER PISO A CONSTRUIR	50,00		
AREA SEGUNDO PISO A CONSTRUIR	51,85		
AREA TOTAL A CONSTRUIR	101,85		
AREA LIBRE	1,15		
NUMERO DE PISOS		2	
INDICE DE OCUPACION			1,00
INDICE DE CONSTRUCCION			2,04
ESTACIONAMIENTOS			

Así las cosas, no es posible que se le responsabilice a la Alcaldía de Silvania, por los daños y perjuicios como Tampoco hay lugar a indemnización de algún tipo por parte de este ente territorial que represento ya que como se dijo, el demandante no puede alegar a su favor su propia culpa y por lo tanto esta excepción está llamada a prosperar.

Como medios probatorios para acreditar esta excepción están el escrito de demanda con sus anexos principalmente el dictamen pericial, los informes de los funcionarios de la Oficina de Planeación del Municipio de Silvania Cundinamarca, La carpeta que contiene el trámite de solicitud y expedición de la licencia de construcción con todos sus anexos.

4.3 Inexistencia del daño

Se interpone la presente demanda sin título de imputación. Sin embargo, se echan de menos la mención de los requisitos necesarios para la configuración de responsabilidad civil extracontractual.

Se debe indicar que ya está decantado por parte de la jurisprudencia los

requisitos que se deben acreditar en la reclamación de perjuicios.

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.³

Si bien nos referiremos a la existencia del daño, no puede pasar desapercibido la falta de precisión y argumentación frente al título de imputación en la demanda.

Veamos sobre la Falla en el servicio lo que afirma el Consejo de Estado:

(...)la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía. Con fundamento en lo anterior, debe la Sala establecer si en el presente asunto se configuraron los elementos para declarar la responsabilidad de la Administración por una falla en la prestación de los servicios a su cargo, en este caso relativos a la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de una escritura pública realizada de forma fraudulenta y la presunta falta de control por parte de la demandada para advertir tal irregularidad e impedir dicho registro (...) “

Tenemos que este título de imputación se activa por: i) Retardo, ii) por irregularidad, iii) por ineficiencia, v) por omisión o vi) por ausencia del mismo. Se debe precisar que en la demanda brilla por su ausencia la causal por la cual se activa la falla en el servicios, pues encontramos argumentación referida a una acción de la administración sin indicar si es por ineficiencia, irregularidad, retardo, y encontramos un capítulo referido a la negligencia de la entidad, dejando totalmente a cargo del Juez determinar los hechos constitutivos y su consecuencia jurídica, que si bien tiene la judicatura el poder de corrección, este no llega al punto de suplir las graves deficiencias de la demanda.

El daño es el primer elemento de la responsabilidad, acreditada su existencia,

carga que le incumbe a la parte actora, se analiza el título de imputación. Veamos que se dice en la demanda sobre el daño:

Ténganse en cuenta que se sustenta el presunto daño en que el demandante invirtió sus ahorros en la construcción de su vivienda y ahora deben demoler la construcción por las grietas y afectaciones a dicha vivienda.

Debe tenerse en cuenta que la argumentación obedece más a unos perjuicios morales que a unos perjuicios materiales. No es claro, cuál es el daño sufrido por el demandante, y el valor que sustentan lo hacen un avalúo como si esto por sí solo explicara el daño y su monto. El daño para ser indemnizable debe reunir unos requisitos. La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 Superior, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido éste como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que éste sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos. (...) Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente probado.

El Tribunal de Boyacá, detalla más los elementos del daño:

Las características del daño son: i) que sea cierto, presente o futuro; ii) determinado o determinable y anormal y iii) que se trate de una situación jurídicamente protegida, esto es, que no se trate de situaciones jurídicas ilegítimas o contrarias a la ley y la Constitución. Entonces, para que el daño resulte indemnizable, es necesario que este afecte o se concrete en un derecho subjetivo o en un interés legítimo del cual sea titular la víctima que, valga decir, debe estar situado dentro de la tutela y protección del Estado.

Para que el daño sea cierto debe ser real y efectivo, no una simple hipótesis y mera expectativa.

Sobre el daño cierto, encontramos en la doctrina:

Próximo al daño futuro, pero discernible de él en la mayoría de los casos, se encuentra el daño eventual. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de daño se caracteriza suficientemente cuando se recuerda que el daño futuro no es sino una variedad del daño cierto, en tanto que el concepto de daño eventual se opone, precisamente y en forma radical, al concepto de certeza: daño eventual equivale, entonces, al daño que no es cierto; o sea, el daño meramente fundado en suposiciones o conjeturas"

De tal forma que los demandantes no acreditaron el daño, más que con un avalúo, pero se indica que tenían la esperanza de construir su vivienda, sin que ello convierta el daño en cierto. No se tiene claridad frente a la esperanza (mera expectativa) de los propietarios.

4.4. Deber de mitigación del daño

Sea pertinente indicar que le es exigible a la víctima adelantar actuaciones tendientes a la mitigación del daño, más que como quedó indicado, ellos eran residentes o tenían otras propiedades en la vereda Subia del Municipio de Silvania, siendo conocedores de la situación del predio. No ejercieron la debida diligencia en

su calidad de futuros compradores y posteriormente como propietarios, así mismo, no ejercieron los derechos que como compradores tenía frente al vendedor de los predios.

De igual forma, es importante hablar del hecho de la propia víctima y su deber de mitigación que la obliga, conforme con la buena fe, a tomar medidas razonables para minimizar el daño sufrido o evitar su agravación. (si es que este existe en el presente caso).

Sobre este punto afirma la doctrina:

Cuando la víctima tuvo la posibilidad, por medios seguros, razonables y proporcionados, de reducir el alcance de su perjuicio o de evitar su agravación, se tendrá en cuenta su abstención, para reducir la indemnización, salvo que las medidas en cuestión hubieran comportado una afectación de su integridad física”.

Resaltemos cómo esa norma propuesta impone a la víctima, en ciertos casos y con ciertas salvedades, la obligación de reducir el alcance del perjuicio o de evitar su agravación, mediante la utilización de medios razonables y proporcionados, so pena de ver reducida su indemnización.

Esta obligación de mitigar el daño, no es solamente una figura que ha tenido tratamiento en el derecho continental europeo, sino que también ha sido mencionada por autores latinoamericanos, quienes ven en la pasividad de la víctima frente a los efectos nocivos del daño, una variable del denominado hecho de la víctima con efectos exoneratorios. Así, la ya mencionada profesora Zavala dice: “Así como no existe un derecho de dañar injustamente, el damnificado soporta la carga (imperativo del propio interés) de desplegar diligencias ordinarias para evitar la continuidad o el agravamiento de su perjuicio. Por eso el hecho de la víctima puede atenuar la obligación resarcitoria no solo cuando es concausa del daño imputable a otro, si estas omisiones sobrevivientes coadyuvan a desenvolver el perjuicio inicial. Es jurídicamente relevante la conducta del perjudicado que guarda una injustificada pasividad, sin intentar medidas razonables para paliar el daño que alguien causó. Procede computar esa inercia para descontar de la indemnización la cuota de agravación o de prolongación del daño a ella imputable. Por ejemplo, no cabría reclamar por dos años de privación de uso de un vehículo que pudo repararse en dos semanas; ni un lucro cesante sine die de una persona ilegítimamente cesanteadada que no se preocupó por conseguir un empleo sustitutivo; ni por todos los daños derivados de una mala praxis médica, (...)”

Las causales exonerarías de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo impiden la declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Revista de Derecho Privado No 20, Universidad Externado de Colombia 2011 enero a Junio.

De igual forma se ha pronunciado el Consejo de Estado:

Finalmente, es preciso señalar que la jurisprudencia de la Sección ha expuesto que a los demandantes les es exigible un deber de mitigación del daño o de evitar el riesgo que conlleva a la concreción de aquel, al respecto:

Si está en manos del interesado evitar el daño es su deber hacerlo, pues de lo contrario incurre en una actitud negligente, de desidia frente a sus propios deberes, lo cual le impide trasladar a la administración las consecuencias desfavorables de ello y perseguir, entonces, la obtención de una ventaja o provecho económico, con cargo al patrimonio de aquella, pues tal comportamiento no solo resulta contrario a la buena fe, principio superior por el cual se deben regir todas las relaciones entre el Estado y los administrados, sino que también contraría el principio de derecho según el cual nadie puede sacar provecho de su propia desidia.

Sobre la culpa de la propia víctima

*“(…) Específicamente, que ~~pueda~~ hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto, puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física exclusivo y reprochable del señor ..., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (...)”*²⁰ del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar.(...) ” Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. María Adriana Marín, Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020), Radicación número: 73001-23-31-000-2011-00114-01(44362)

Se reitera, el demandante era conocedor del riesgo que rondaba la Urbanización Sasipa y sus alrededores, sabía la situación del predio, sin que sea una situación sorpresiva para él. Es deber de los particulares actuar con buena fe en sus negocios. Se está reclamando al Municipio unos daños por una situación que era conocida por el demandante y frente a la cual permaneció de forma pasiva.

En informe de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR” se insta tanto a la entidad territorial como al hoy demandante a realizar obras de mitigación así:

“A la administración municipal de Silvania y/o los propietarios de los predios dentro de los cuales se hallan las inestabilidades, remociones o desplazamiento de suelo, analizar la pertinencia y si es del caso a la mayor brevedad contratar profesionales idóneos o empresas especializadas en suelos, con el fin de obtener concepto y las recomendaciones del caso, frente a las acciones y obras a implementar, tendientes a mitigar el riesgo que se pueda estar potenciando.

*Por parte de la administración municipal de Silvania, **y/o los propietarios** de los predios dentro de los cuales se hallan las inestabilidades, remociones o desplazamiento de suelo, analizar la pertinencia y si es del caso a la mayor brevedad contratar profesionales idóneos o empresas especializadas en el recurso hídrico, con el fin de obtener concepto y las recomendaciones del caso, frente a las acciones y obras a implementar dentro del área aferente a la Urbanización Sasipa, tendientes a reducir flujos incontrolados con obras que permitan captar, conducir y evacuar cualquier caudal hasta descargarlo en un lugar adecuado, y que para el caso sería a una fuente hídrica natural cercana (...)”* Negrillas mías

Como se ha resaltado a lo largo de esta contestación, el Municipio de Silvania Cundinamarca ha ido más allá de las labores de sus labores, pues nos solo ha realizado inversiones para los estudios de amenaza, sino que ha gestionado los recursos a través de La unidad de gestión del riesgo el departamento de Cundinamarca con el fin de que se destinen los recursos necesarios a efectos de establecer planes y proyectos de mitigación en el sector de Yayatá - las villas.

Contrario sensu y de acuerdo a las recomendaciones sugeridas a los propietarios de

la Urbanización Sasipa por parte la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Brillan por su ausencia cualquier intento o asomo que conduzcan a la mitigación del riesgo que se genera con la remoción en masa en la zona.

Esta excepción está llamada a prosperar y como prueba se llega el informe de la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Del 14 de septiembre del 2020.

4.5. Mala fe del demandante.

Al no existir responsabilidad por parte de la Alcaldía de Silvania, tampoco podría reclamarle indemnización o algún tipo de reclamación o erogación económica por concepto de perjuicios, pues no existe un nexo causal entre el daño y el hecho por acción u omisión de esta entidad territorial, por el contrario estamos frente a una situación de mala fe por parte del demandante, quien reclama daños y perjuicios que él mismo ocasionó al incumplir las normas urbanísticas y, como se dijo anteriormente, no está demostrado que los daños se pudieran atribuir al Municipio de Silvania, por lo tanto, esta excepción está llamada a no prosperar y así depreco de su señoría, que se despache favorablemente con su respectiva condena en costas.

4.6. Falta de legitimidad en la causa por pasiva.

Excepción que se fundamenta en las situaciones legales planteadas en los anteriores medios exceptivos, ya que de prosperar dichas excepciones el Municipio de Silvania Cundinamarca no tiene legitimidad sustantiva para ser demandado, máxime cuando no hay relación de causalidad entre el hecho y el daño que sea atribuible al Municipio de Silvania, pues ha quedado decantado y acreditada la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero, y la inexistencia del daño, pues como se demuestra con el acervo probatorio que se allega con este libelo, situación que legalmente le restan la legitimidad que le debe asistir para ser sujeto pasivo de la acción que nos ocupa.

Esta excepción también tiene fundamento legal en los medios probatorios y con las acciones positivas adelantas por a la Alcaldía de Silvania Cundinamarca a través de la Oficina de Planeación y de su Comité de Gestión del Riesgo que se enuncian así:

1°. Se expidió la Resolución No. 401, por medio de la cual se ordenó como medida preventiva la abstención de las obras en ejecución, y no se permiten la construcción de más edificaciones en la Urbanización de, sector Yayata - Las Villas y zonas aledañas y, se suspende la expedición de licencias de construcción de obras vigentes. (ver resolución como anexo probatorio).

2°. El Comité de Gestión del Riesgo del Municipio de Silvania Cundinamarca, en asocio con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca, en adelante (UAEGRD), ubicaron unos puntos estratégicos de monitoreo con el fin de establecer un sistema para interpretar el comportamiento del terreno y poder predecir la evolución de sus condiciones de estabilidad y tomar acciones preventivas y correctivas, con el fin de preservar la integridad de las personas y sus bienes, además, para poder establecer las diferentes estrategias de mitigación a las que haya lugar.

Prueba de ello, son los informes de monitoreo practicados el día 26 de agosto, 11 de septiembre, 24 de septiembre y 21 de octubre de 2020, que se anexan con esta contestación.

3°. El Municipio de Silvania Cundinamarca, ha puesto en conocimiento la situación presentada en el sector de Yayatá ante las autoridades del orden Departamental y Nacional, y por ello, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca, expidió el Decreto No. 513 del 27 de diciembre del 2022, mediante el cual se priorizan y aprueban proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en este Decreto, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca, destina recursos para la construcción de obras para mitigar los riesgos que se presentan en las zonas aledañas a la Urbanización del municipio de Silvania Cundinamarca (ver imagen)

CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	FASE	VIGENCIA PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL APROBADO
2022004250031	Construcción de obras para mitigar los riesgos que se presentan en la zonas aledañas a la urbanización sasipa del municipio de Silvania, Cundinamarca	GOBIERNO TERRITORIAL	FACTIBILIDAD FASE III	2021-2022	\$ 3.673.954.111,00
FUENTES		TIPO DE RECURSOS		CRONOGRAMA MGA	VALOR
SGR - Asignación para la Inversión Regional		Asignación para la inversión regional 60% - Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático		2021-2022	\$3.523.954.111,00
SGR - Asignación para la Inversión Regional		Asignación para la Inversión Regional 60%		2021-2022	\$150.000.000,00

ARTÍCULO SEGUNDO. Designar como entidad ejecutora y encargada de adelantar la contratación del proyecto de inversión BPIN 2022004250031 denominado “**Construcción de obras para mitigar los riesgos que se presentan en la zona aledañas a la urbanización sasipa del municipio de Silvania, Cundinamarca**”, al Departamento de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca –UAEGRD, como se detalla a continuación:

4°. En aras de acreditar la diligencia por la situación presentada en el sector Yayta Las Villas, la Alcaldía de Silvania en cumplimiento a los compromisos y dada la necesidad de mitigar el riesgo en la Urbanización Sasipa, contrató con la empresa JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS, mediante contrato No. 123 del 2021, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS SEGÚN EL DECRETO 1807 DE 2014, ORIENTADOS A DETERMINAR LA CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO Y ESTABLECER LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN CORRESPONDIENTES EN LA ZONAS ALEDAÑAS A LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA”. (ver expediente administrativo que se aporta con la contestación de la demanda)

Solicito comedidamente sean tenidas en cuenta todas las pruebas que se allegan con este escrito con el fin de ser probada la presente excepción.

4.7. Excepción innominada.

Esta excepción está llamada a prosperar cuando resulte probado en el proceso un hecho que no haya sido atacado u objeto de pronunciamiento en la contestación de la demanda con el que se desvirtúen las pretensiones de la acción.

4.8. Excepción genérica.

Cualquier otra excepción que el señor Juez encuentre probada en este asunto y que no haya sido enunciada, de conformidad con lo contemplado en el Artículo 282 del CGP.

V. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Se interpone la presente demanda sin título de imputación. Sin embargo, se echan de menos la mención de los requisitos necesarios para la configuración de responsabilidad civil extracontractual.

Se debe indicar que ya está decantado por parte de la jurisprudencia los requisitos que se deben acreditar en la reclamación de perjuicios.

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.³

Si bien nos referiremos a la existencia del daño, no puede pasar desapercibido la falta de precisión y argumentación frente al título de imputación en la demanda.

Veamos sobre la Falla en el servicio lo que afirma el Consejo de Estado:

(...)la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía. Con fundamento en lo anterior, debe la Sala establecer si en el presente asunto se configuraron los elementos para declarar la responsabilidad de la Administración por una falla en la prestación de los servicios a su cargo, en este caso relativos a la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de una escritura pública realizada de forma fraudulenta y la presunta falta de control por parte de la demandada para advertir tal irregularidad e impedir dicho registro (...) “

Tenemos que este título de imputación se activa por: i) Retardo, ii) por irregularidad, iii) por ineficiencia, v) por omisión o vi) por ausencia del mismo. Se debe precisar que en la demanda brilla por su ausencia la causal por la cual se activa la falla en el servicios, pues encontramos argumentación referida a una

acción de la administración sin indicar si es por ineficiencia, irregularidad, retardo, y encontramos un capítulo referido a la negligencia de la entidad, dejando totalmente a cargo del Juez determinar los hechos constitutivos y su consecuencia jurídica, que si bien tiene la judicatura el poder de corrección, este no llega al punto de suplir las graves deficiencias de la demanda.

El daño es el primer elemento de la responsabilidad, acreditada su existencia, carga que le incumbe a la parte actora, se analiza el título de imputación. Veamos que se dice en la demanda sobre el daño:

Ténganse en cuenta que se sustenta el presunto daño en que el demandante invirtió sus ahorros en la construcción de su vivienda *“y ahora deben demoler la construcción por las grietas y afectaciones a dicha vivienda.*

Debe tenerse en cuenta que la argumentación obedece más a unos perjuicios morales que a unos perjuicios materiales. No es claro, cuál es el daño sufrido por el demandante, y el valor que sustentan lo hacen un avalúo como si esto por sí solo explicara el daño y su monto, El daño para ser indemnizable debe reunir unos requisitos La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 Superior, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido éste como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que éste sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos. (...) Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente probado.

El Tribunal de Boyacá, detalla más los elementos del daño:

Las características del daño son: i) que sea cierto, presente o futuro; ii) determinado o determinable y anormal y iii) que se trate de una situación jurídicamente protegida, esto es, que no se trate de situaciones jurídicas ilegítimas o contrarias a la ley y la Constitución. Entonces, para que el daño resulte indemnizable, es necesario que este afecte o se concrete en un derecho subjetivo o en un interés legítimo del cual sea titular la víctima que, valga decir, debe estar situado dentro de la tutela y protección del Estado.

Para que el daño sea cierto debe ser real y efectivo, no una simple hipótesis y mera expectativa.

Sobre el daño cierto, encontramos en la doctrina:

Próximo al daño futuro, pero discernible de él en la mayoría de los casos, se encuentra el daño eventual. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de daño se caracteriza suficientemente cuando se recuerda que el daño futuro no es sino una variedad del daño cierto, en tanto que el concepto de daño eventual se opone, precisamente y en forma radical, al concepto de certeza: daño eventual equivale, entonces, al daño que no es cierto; o sea, el daño meramente fundado en suposiciones o conjeturas”

De tal forma que los demandantes no acreditaron el daño, más que con un avalúo, pero se indica que tenían la esperanza de construir su vivienda, sin que ello convierta el daño en cierto. No se tiene claridad frente a la esperanza (mera expectativa) de los propietarios.

VI. PRUEBAS

6.1. Documentales

1. Carpeta Administrativa – carpeta urbanización Sasipa.
2. Monitoreos:
 - 2.1. Informe de topografía - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Riesgo de Desastres UAEGRD. 11SEP2020.
 - 2.2. Monitoreo 2 Informe de Asistencia Técnica _ Unidad Administrativa Especial de Gestión de Riesgo de Desastres UAEGRD. 21OCT2020.
 - 2.3. Monitoreo 3 Informe de Asistencia Técnica Unidad Administrativa Especial de Gestión de Riesgo de Desastres UAEGRD. 24 SEP2020.
 - 2.4. Monitoreo 4 Informe de Asistencia Técnica _Unidad Administrativa Especial de Gestión de Riesgo de Desastres UAEGRD. 26 AGOS2020.
3. Acuerdo de conformación Consorcio Ruta 40- 16 DE OCTUBRE DE 2016.
4. Informe técnico de visita ocular _ Unidad Administrativa Especial de Gestión de Riesgo de Desastres UAEGRD. 13 JUL 2020.
5. Informe Técnico DRSU No. 0927 de 14 SEP. 2020 - Corporación Autónoma Regional CAR.
6. Resolución Administrativa No. 4207 de diciembre 20 de 2.018 “por medio de la cual se concede una Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva”.
7. INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR PREDIO: Lote # 13 – Manzana B – Sasipa. ENERO 2023.- Oficina de Planeación Municipal.
8. INFORME DE VISITAS DE CAMPO 19/09/2023_ Oficina de Planeación Municipal.
9. Plano aprobado para Licencia de Construcción.
10. Acta de entrega Instituto Nacional de Vías INVIAS - Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

6.2. Testimoniales

- **FABIO EDGAR ARDILA PARDO.** Funcionario de la CAR que realizó informe técnico Informe Técnico DRSU No. 0927 de 14 SEP. Apoyo a la Gestión Ambiental Interinstitucional y tuvo conocimiento de primera mano sobre la situación de la Urbanización Sasipa en lo que tiene que ver con el factor ambiental.
- **DAISSY MILENA RICO PRIETO.** Inspectora de obras adscrita a la oficina de Planeación del Municipio de Sylvania Cundinamarca y fuera quién presentará informe Acerca de la visita ocular realizada en enero del año 2023 y tuvo conocimiento de primera mano sobre la situación de la Urbanización Sasipa en lo que tiene que ver con el factor arquitectónico.
- **CAMILO ARDILA BERMEO.** Ingeniero civil quien funge como apoyo a la Secretaria de Planeacion y Gestion del riesgo, y fuera quién presentará informe Acerca de la visita ocular realizada el 29 de junio del año 2023 y tuvo conocimiento de primera mano sobre la situación de la Urbanización Sasipa en lo que tiene que ver con el factor estructural.
- **RICARDO CASTAÑEDA, DAINIS ARENAS, ANDRÉS DEL RIO.** Ingeniero de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca quien funge como funcionario de la entidad y fue el encargado de Realizar visita de inspección ocular a fin de evaluar los daños e iniciar plan de

acción para determinar los estudios necesarios que permitan mitigar el riesgo de la población de la Urbanización Sasipa, debido a la remoción en masa que se está presentando actualmente en el sector, con fecha del 11 de agosto de 2020.

- **GERMÁN ANTONIO BARRAGÁN.** Actual Jefe de Planeación del Municipio de Silvania y quien ha realizado seguimiento a la situación que se presenta en la Urbanización Sasipa y puede contar los pormenores sobre la situación que se ha presentado por la remoción En masa, en la Urbanización Sasipa y en las zonas aledañas al sector Yayatá - Las Villas.

Todos los testigos pueden ser citados a través de la Alcaldía Municipal de Silvania.

PETICIÓN ESPECIAL

En atención al Artículo 228 del C.G.P., Solicito comedidamente la comparecencia de la profesional **RUTH STELLA ARTEAGA JAIMES**, perito evaluador con correo electrónico thstellaarteaga@gmail.com, quien suscribe el peritaje de avalúo aportado por el demandante a fin de interrogar a la perito aspectos de su experticia de conformidad con el precitado artículo.

6.3. Interrogatorio de parte.

Solicito comedidamente citar al demandante **JOSÉ GABRIEL PÉREZ PÉREZ**, para que concurra a absolver bajo la gravedad del juramento el interrogatorio de parte que le formularé verbalmente o mediante escrito oportunamente presentado, sobre los hechos de la demanda y del proceso.

6.4. OTROS MEDIOS DE PRUEBA

Comedidamente pido a este despacho se sirva, además de otorgar valor probatorio a los documentos relacionados, a los testimonios solicitados, y a los que eventualmente pueda decretar de oficio la señora juez, decretar durante el trámite del proceso la práctica de las siguientes pruebas:

Inspección judicial con peritos, para determinar la identidad del predio, su extensión, linderos, estado de conservación, manifestaciones ostensibles de su explotación económica adecuada, mejoras, antigüedades de ellas, y demás aspectos relevantes para el presente caso. Tal como lo impone el numeral 9º del artículo 375 en concordancia con los artículos 236 al 239 del Código General del Proceso.

De Oficio: Se oficie a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, y al Consorcio Ruta 40 con el fin de que alleguen el plan de manejo de aguas fluviales, en el sector **UNIDAD FUNCIONAL 6** Entre los municipios de Silvania y Granada(18,9km) Silvania y Granada.

La Unidad Funcional 6, está comprendida entre los municipios de Silvania y Granada con una longitud aproximada de 18 kilómetros.

Los trabajos comprenden la rehabilitación y ampliación a tercer carril en ambas calzadas, la construcción de nuevos puentes peatonales, así como la adecuación de puentes vehiculares y peatonales, estabilización de taludes y obras hidráulicas, entre otras actividades.

VII. ANEXOS

- Poder, copia de la T.P y CC, documentos de la Alcaldesa Municipal, y constancia de envío de datos.
- Los documentos enunciados como pruebas.

VIII. NOTIFICACIONES

Agencia Nacional de Infraestructura - contactenos@ani.gov.co,
busonjudicial@ani.gov.co.

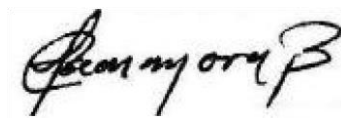
Consortio Ruta 40 - correspondeia@consorcioruta40.com

Parte demandante y Ministerio Publico - direcciones anotadas en el expediente

Alcaldía Municipal de Silvania - alcaldia@silvania-cundinamarca.gov.co,
oficinajuridica@silvania-cundinamarca.gov.co

El suscrito recibe notificaciones en el correo electrónico: ojmorab26@gmail.com,
oficinajuridica@silvania-cundinamarca.gov.co

Cordialmente,



OSCAR JAVIER MORA BUSTOS
C.C. No 87.713.261 de Ipiales Nariño
T.P 157.215 del C S de la J.



Oscar Javier Mora Bustos <ojmorab.26@gmail.com>

PODER ESPECIAL Radicado: 25307-3333-003-2023-00014-00 Demandante: JOSE GABRIEL PEREZ PEREZ Demandado: MUNICIPIO DE SILVANIA – EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A E.S.P EMPUSILVANIA Medio de Control: REPARACION DIRECTA

1 mensaje

Oficina Jurídica <oficinajuridica@silvania-cundinamarca.gov.co>
Para: ojmorab <ojmorab@hotmail.com>, "ojmorab.26" <ojmorab.26@gmail.com>

13 de julio de 2023, 9:30

Silvania, julio 10 de 2023

Señores

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE GIRARDOT

E. S. D.

-

-

Radicado: 25307-3333-003-2023-00014-00**Demandante:** JOSE GABRIEL PEREZ PEREZ**Demandado:** MUNICIPIO DE SILVANIA – EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A E.S.P EMPUSILVANIA**Medio de Control:** REPARACION DIRECTA**Juez:** Dra. GLORIA LETICIA URREGO MEDINA

NOHORA ELIZABETH SÁNCHEZ SUÁREZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 20.926.486 expedida en Silvania, en calidad de Alcaldesa del Municipio de Silvania, cargo para el que fue elegida en los comicios electorales del 27 de octubre de 2019, para el periodo 2020-2023, reconocida por la Organización Electoral – Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante credencial E-27, expedida por la Comisión Escrutadora General, en la ciudad de Bogotá el 12 de noviembre de 2019, y para el cual tomo posesión ante la Notaria Única de Silvania, el 19 de diciembre de 2019, actuando en nombre y representación del Municipio con NIT 890680437-0, mediante el presente escrito manifiesto, que confiero **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE** al Doctor **OSCAR JAVIER MORA BUSTOS**, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 87.713.261 de Ipiales, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 157.215 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, correo electrónico ojmorab.26@gmail.com para que asuma la defensa en representación del Municipio de Silvania, y ejecute cualquier acción en cumplimiento de su protección, para lograr culminar exitosamente el proceso de la referencia.

Mi apoderado queda facultado para representar al Municipio en todas las instancias del proceso referenciado, con las expresas facultades establecidas en el artículo 77 del Código General del Proceso, al igual que las determinadas en el Código de Procedimiento Penal, y especialmente las de recibir, sustituir, reasumir poder, designar suplente, transigir, tachar y refutar documentos y testigos, conciliar, desistir y formular todas las pretensiones, , y demás facultades legalmente otorgadas, propias del presente mandato, que estime convenientes para la defensa del Municipio.

El presente se confiere de conformidad con el artículo 5° de la Ley 2213 de 2022.

Sírvase, reconocer personería para actuar a mi apoderado, en los términos y para los efectos del presente poder.

Atentamente,

NOHORA ELIZABETH SÁNCHEZ SUÁREZ.

C: C. No. 20.926.486 de Silvania.

alcaldia@silvania-cundinamarca.gov.co

Acepto,

OSCAR JAVIER MORA BUSTOS

C.C. No.87.713.261 de Ipiales

T.P. No. 157.215 del C.S. de la J.

ojmorab.26@gmail.com

OFICINA DEL AREA JURIDICA
Secretaria de Gobierno - Alcaldia Municipal.
Silvania Cundinamarca

"Todos Construimos el Cambio"

Tel: 868 5870 E-mail: [alcaldia](mailto:alcaldia@silvania-cundinamarca.gov.co)

[@silvania-cundinamarca.gov.co](mailto:alcaldia@silvania-cundinamarca.gov.co)

Diagonal 10 # 6 - 04 Silvania (Cund.) Código Postal: 252240



 **poder girardot.pdf**
605K

Silvania, julio 10 de 2023

Señores

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE GIRARDOT

E. S. D.

Radicado: 25307-3333-003-2023-00014-00

Demandante: JOSE GABRIEL PEREZ PEREZ

Demandado: MUNICIPIO DE SILVANIA – EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA S.A E.S.P EMPUSILVANIA

Medio de Control: REPARACION DIRECTA

Juez: Dra. GLORIA LETICIA URREGO MEDINA

NOHORA ELIZABETH SÁNCHEZ SUÁREZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 20.926.486 expedida en Silvania, en calidad de Alcaldesa del Municipio de Silvania, cargo para el que fue elegida en los comicios electorales del 27 de octubre de 2019, para el periodo 2020-2023, reconocida por la Organización Electoral – Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante credencial E-27, expedida por la Comisión Escrutadora General, en la ciudad de Bogotá el 12 de noviembre de 2019, y para el cual tomo posesión ante la Notaria Única de Silvania, el 19 de diciembre de 2019, actuando en nombre y representación del Municipio con NIT 890680437-0, mediante el presente escrito manifiesto, que confiero **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE** al Doctor **OSCAR JAVIER MORA BUSTOS**, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 87.713.261 de Ipiales, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 157.215 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, correo electrónico ojmorab.26@gmail.com para que asuma la defensa en representación del Municipio de Silvania, y ejecute cualquier acción en cumplimiento de su protección, para lograr culminar exitosamente el proceso de la referencia.

Mi apoderado queda facultado para representar al Municipio en todas las instancias del proceso referenciado, con las expresas facultades establecidas en el artículo 77 del Código General del Proceso, al igual que las determinadas en el Código de Procedimiento Penal, y especialmente las de recibir, sustituir, reasumir poder, designar suplente, transigir, tachar y refutar documentos y testigos, conciliar, desistir y formular todas las pretensiones, , y demás facultades legalmente otorgadas, propias del presente mandato, que estime convenientes para la defensa del Municipio.

El presente se confiere de conformidad con el artículo 5° de la Ley 2213 de 2022.

Sírvase, reconocer personería para actuar a mi apoderado, en los términos y para los efectos del presente poder.

Atentamente,


NOHORA ELIZABETH SÁNCHEZ SUÁREZ.

C: C. No. 20.926.486 de Silvania.

alcaldia@silvania-cundinamarca.gov.co

Acepto,


OSCAR JAVIER MORA BUSTOS

C.C. No. 87.713.261 de Ipiales

T.P. No. 157.215 del C.S. de la J.

ojmorab.26@gmail.com

Gestión documental.
Proyectó y digitó: Juan Camilo Rodríguez Muñoz- secretario de Gobierno
Revisó y aprobó: Nohora Elizabeth Sánchez Suárez, Alcaldesa Municipal
Copia - archivo



ACTA DE POSESION No.001

En el Municipio de Silvania, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), ante el despacho de la **NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE SILVANIA**, en donde ejerce sus funciones como Notario en propiedad el Doctor **MARIO ALBERTO RAMIREZ GIRALDO**.

COMPARECIO: La doctora **NOHORA ELIZABETH SANCHEZ SUAREZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.926.486 expedida en Silvania (Cundinamarca), de estado civil casada con sociedad conyugal vigente, con el fin de tomar posesión del cargo como **ALCALDE ELECTO(A) DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA**, para el cual fue nombrado por elección popular celebrada el día 27 de octubre de 2019, mediante credencial No. E-27 del día veintisiete (27) de octubre de 2015, para el periodo 2020 -2023.

Acto seguido la compareciente exhibió los siguientes documentos, que se protocolizan con esta acta:

- Copia autenticada de la CREDENCIAL No.E-27 de la ORGANIZACIÓN ELECTORAL – REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL expedida por la COMISION ESCRUTADORA GENERAL en la ciudad de Bogotá a los 12 días de mes de Noviembre de 2019.
- Certificado(s) de Antecedentes Especial No. 138513107 y 138513432 expedidos por la página web de la Procuraduría General de la Nación, de fecha 19 de diciembre de 2019.
- Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la página web (SIBOR) de la Contraloría General de la Nación, de fecha 19 de diciembre de 2019.
- Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales, expedida por la página web de la Policía Nacional de Colombia, de fecha 19 de diciembre de 2019.
- Copia autenticada del Certificado de asistencia al seminario de inducción de Alcaldes y Gobernadores expedido por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP– el 27 de Noviembre de 2019.
- Certificación de ALIANSALUD EPS de afiliación al POS DE FECHA 18 DE Diciembre de 2019.
- Certificación de afiliación a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES de fecha Diciembre 19 de 2019.
- Certificado Médico de fecha 19 de Diciembre de 2019.
- DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES de fecha Diciembre 19 de 2019 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122, inciso 3° de la Constitución Política de Colombia y en los artículos 13 y 14 de la ley 190 de 1995. (la de su cónyuge)

- Declaraciones sobre la inexistencia de proceso de alimentos de fecha Diciembre 19 de 2019. (Ley 311 de 1996).
- Declaración bajo la gravedad el juramento sobre inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el cargo de fecha Diciembre 19 de 2019.
- Formato único de HOJA DE VIDA (Ley 19 de 1995 artículos 1 y 5)
- Fotocopia de la Cédula de ciudadanía.

Cumplidos así los requisitos legales propios, para el desempeño del cargo el cual se posesiona el día de hoy, el suscrito Notario recibió a la Compareciente el Juramento de rigor, conforme a lo preceptuado por los artículos 172 del Código Penal y 285 del Código de Procedimiento Penal por el cual prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone, y respetar, obedecer, y hacer respetar la constitución y las leyes de la República.

"JURO A DIOS Y PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCION, LAS LEYES DE COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS".

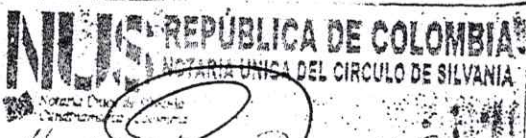

La presente acta surte efectos legales y fiscales a partir del primero (01) de enero del año dos mil veinte (2020).

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma por quienes en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).


La posesionada,



NOHORA ELIZABETH SANCHEZ SUAREZ
ALCALDE ELECTO(A) DEL MUNICIPIO DE SILVANIA

El notario,



MARIO ALBERTO RAMIREZ GIRALDO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE SILVANIA.

Testigos,


MARIBEL CHAVES CASAS
CC No. 51.990.505 DE BOGOTÁ


JUAN CARLOS RODRIGUEZ CELIS
CC No. 11.389.512 DE FUSAGASUGA

- Declaraciones sobre la inexistencia de proceso de alimentos de fecha Diciembre 19 de 2019. (Ley 311 de 1996).
- Declaración bajo la gravedad el juramento sobre inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el cargo de fecha Diciembre 19 de 2019.
- Formato único de HOJA DE VIDA (Ley 19 de 1995 artículos 1 y 5)
- Fotocopia de la Cédula de ciudadanía.

Cumplidos así los requisitos legales propios, para el desempeño del cargo el cual se posesiona el día de hoy, el suscrito Notario recibió a la Compareciente el Juramento de rigor, conforme a lo preceptuado por los artículos 172 del Código Penal y 285 del Código de Procedimiento Penal por el cual prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone, y respetar, obedecer, y hacer respetar la constitución y las leyes de la República.

"JURO A DIOS Y PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCION, LAS LEYES DE COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS".

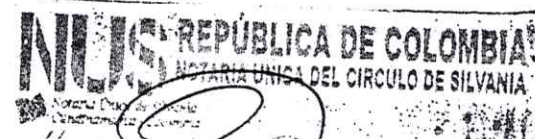

La presente acta surte efectos legales y fiscales a partir del primero (01) de enero del año dos mil veinte (2020).

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma por quienes en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).


La posesionada,



NOHORA ELIZABETH SANCHEZ SUAREZ
ALCALDE ELECTO(A) DEL MUNICIPIO DE SILVANIA

El notario,



MARIO ALBERTO RAMIREZ GIRALDO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE SILVANIA.

Testigos,


MARIBEL CHAVES CASAS
CC No. 51.990.505 DE BOGOTÁ


JUAN CARLOS RODRIGUEZ CELIS
CC No. 11.389.512 DE FUSAGASUGA



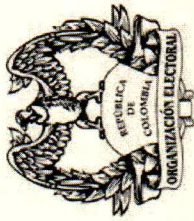
ACTA DE POSESION No.001

En el Municipio de Silvania, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), ante el despacho de la **NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE SILVANIA**, en donde ejerce sus funciones como Notario en propiedad el Doctor **MARIO ALBERTO RAMIREZ GIRALDO**.

COMPARECIO: La doctora **NOHORA ELIZABETH SANCHEZ SUAREZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.926.486 expedida en Silvania (Cundinamarca), de estado civil casada con sociedad conyugal vigente, con el fin de tomar posesión del cargo como **ALCALDE ELECTO(A) DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA**, para el cual fue nombrado por elección popular celebrada el día 27 de octubre de 2019, mediante credencial No. E-27 del día veintisiete (27) de octubre de 2015, para el periodo 2020 -2023.

Acto seguido la compareciente exhibió los siguientes documentos, que se protocolizan con esta acta:

- Copia autenticada de la CREDENCIAL No.E-27 de la ORGANIZACIÓN ELECTORAL – REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL expedida por la COMISION ESCRUTADORA GENERAL en la ciudad de Bogotá a los 12 días de mes de Noviembre de 2019.
- Certificado(s) de Antecedentes Especial No. 138513107 y 138513432 expedidos por la página web de la Procuraduría General de la Nación, de fecha 19 de diciembre de 2019.
- Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la página web (SIBOR) de la Contraloría General de la Nación, de fecha 19 de diciembre de 2019.
- Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales, expedida por la página web de la Policía Nacional de Colombia, de fecha 19 de diciembre de 2019.
- Copia autenticada del Certificado de asistencia al seminario de inducción de Alcaldes y Gobernadores expedido por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP– el 27 de Noviembre de 2019.
- Certificación de ALIANSALUD EPS de afiliación al POS DE FECHA 18 DE Diciembre de 2019.
- Certificación de afiliación a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES de fecha Diciembre 19 de 2019.
- Certificado Médico de fecha 19 de Diciembre de 2019.
- DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES de fecha Diciembre 19 de 2019 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122, inciso 3º de la Constitución Política de Colombia y en los artículos 13 y 14 de la ley 190 de 1995. (la de su cónyuge)



REPUBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E-27

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA GENERAL

DECLARAMOS

Que, NOHORA ELIZABETH SANCHEZ SUAREZ con C.C. 20926486 ha sido elegido(a) ALCALDE por el Municipio de SILVANIA - CUNDINAMARCA, para el periodo de 2020 al 2023, por el PARTIDO COALICIÓN TODOS POR SILVANIA.

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL, en BOGOTÁ D.C., el martes 12 de noviembre del 2019.

EDGARD DANIEL RINCON ANCEL LUIS MANUEL ESCOBAR MEDINA

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

DIANA BIVIANA DIAZ RINCON

SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

GUSTAVO ADOLFO TOBO ROBRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **20.926.486**
SANCHEZ SUAREZ

APELLIDOS
NOHORA ELIZABETH

NOMBRES
Elizabeth Sanchez S.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1963**

ARBOLEDAS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

26-JUL-1983 SILVANIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00388237-F-0020926486-20120714 0030538787A 1 1201893586

CEDULA DE CIUDADANIA
REPUBLICA DE
COLOMBIA

MORA BUSTOS

OSCAR JAVIER

NOMBRES

Франциска

FIRMA



INDICE DERECHO

IPIALES
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

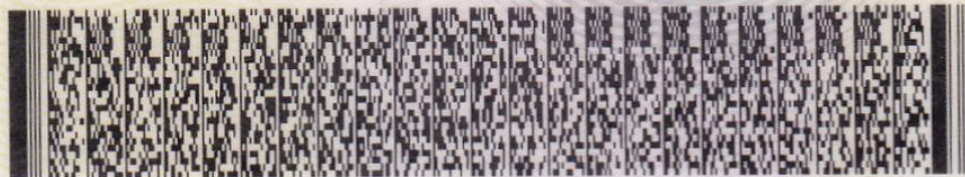
1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

31-DIC-1990 IPIALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1514500-00229986-M-0087713261-20100330

0021850825A 1

28585541

260989

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

157215

Tarjeta No.

10/04/2007

Fecha de
Expedición

09/03/2007

Fecha de
Grado

OSCAR JAVIER
MORA BUSTOS

87713261
Cedula

CUNDINAMARCA
Consejo Seccional

COOPERATIVA BOGOTA
Universidad



[Signature]
Presidente Consejo Superior
de la Judicatura

[Signature]